



**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 121/2022 ACUMULADA
A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2022.**

**PROMOVENTE: MIGUEL OSCAR SABIDO SANTANA,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE YUCATÁN V.S. PODERES LEGISLATIVO Y
EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN**

HONORABLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

YUSSIF DIONEL HEREDIA FRITZ, mexicano de nacimiento e hijo de padres de la misma nacionalidad y origen, casado, mayor de edad legal, Licenciado en Derecho, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones sobre el presente asunto para oír y recibir todo tipo de notificaciones sobre el presente asunto, en el predio marcado con el número doscientos ochenta y cuatro letra "B" de la calle veinte letra "A" por tres letra B, tercer piso de la colonia Xcumpich de la ciudad de Mérida, Yucatán, inmueble denominado "Edificio Administrativo Siglo XXI", que ocupa la Consejería Jurídica, ante este Tribunal Pleno expongo:

En mi carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, cargo que desempeño a partir del día veintisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, fecha en que fui nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Licenciado en Derecho Mauricio Vila Dosal, y la Secretaria de Administración y Finanzas, por suplencia y en ejercicio de las funciones que le correspondan a la Abogada María Dolores Fritz Sierra, con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 19 del Código de la Administración Pública de Yucatán, personalidad que acredito **con la copia fotostática de mi nombramiento que exhibo al presente debidamente certificada** por Notario Público del Estado de Yucatán; y en ejercicio de las atribuciones que como representante del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y de su Titular me confieren los artículos 32 fracción XI del Código de la Administración Pública de Yucatán, 11, apartado A, fracción I y 71 fracción IX de su Reglamento, solicito se reconozca mi personalidad de Consejero Jurídico y de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, para todos los efectos legales pertinentes, asimismo, autorizo como delegados en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en mi nombre oigan y reciban toda clase de notificaciones y documentos, hagan promociones, consulten los autos y constancias del expediente, soliciten copias, rindan pruebas, así como para que ejerciten los derechos procesales que correspondan, conjunta y/o separadamente a los ciudadanos Juan José Galicia López, Ana Paulina Ortega Rosado, Gretty Rubi Cerón Llanes, Gabriela Margarita Montejo Díaz, Claudia Etelh Bacelis Alpuche, René Edilberto Canché Uicab, Yuridia Nictcha Muñoz Cruz, Claudia Karina Sáenz Hoil, Víctor Hugo Cruz Peñalver y José Luis Celis Sosa, ante Vuestra Honorabilidad, comparezco a exponer lo siguiente:

Por medio del presente memorial y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 párrafo primero y 64 párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontrándome en tiempo y forma, dentro de los términos de ley, ocurro a nombre de mi representado a dar contestación a la demanda, que en vía de Acción de Inconstitucionalidad, promueve la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán.

ANTECEDENTES

1



El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 44565/2022 de fecha veintiocho de septiembre de año en curso, suscrito por la Licenciado Ricardo Ruíz del Hoyo Chávez, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, fue notificado a mi representado el acuerdo de fecha trece de septiembre del presente año dictado por el Ministro instructor Alberto Pérez Dayán, designado para conocer del procedimiento de Acción de Inconstitucionalidad 121/2022 acumulada a la acción de Inconstitucionalidad 118/2022.

Mediante dicho acuerdo fue admitida la demanda en la vía propuesta y con la copia del mencionado escrito y del auto de Presidencia de radicación y turno, se emplazó a mi representado para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del proveído referido, rinda el informe a que se refiere los artículos 23 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, se desglosan los días en el cual se da contestación a la acción de inconstitucionalidad promovida:

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.	DÍA QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN.	PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.	DÍAS INHÁBILES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA EN LA QUE EXPIRA EL PLAZO PARA LA RENDICIÓN DEL INFORME ESTABLECIDO EN EL ART. 64 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Jueves 29 de septiembre de 2022.	Jueves 29 de septiembre de 2022.	15 días hábiles	12 de octubre de 2022	Viernes 21 de octubre de 2022.

INFORME

El promovente de esta acción de inconstitucionalidad solicita la declaración de invalidez del Decreto 532/2022 por el que se expidió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la entidad el 21 de julio de 2022.

Es cierto que el veintiuno de julio de dos mil veintidós, mi representado promulgó el decreto número **532/2022** por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 55 fracción II de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14 fracción VII del Código de la Administración Pública de Yucatán. Lo anterior, se realizó como parte de las facultades y atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán y en atención a la situación particular que enfrenta el Sistema de Pensiones de la Entidad.

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ



PRIMERO. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y MOTIVACIÓN REFORZADA DE LA LEY.

Contrario a lo señalado por la accionante en su demanda, el esquema de pensiones, así como el sistema de cálculo de cuotas previsto en la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, no vulnera los principios de progresividad y no regresión tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni exige una motivación reforzada como erróneamente aduce la accionante.

Si bien la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán prevé un incremento de las cuotas a cargo del trabajador, así como mayores requisitos para tener derecho a una pensión por jubilación, es importante partir de explicar que no todos los trabajadores y/o pensionados se encuentran en el mismo ámbito de aplicación de la norma jurídica.

La normativa transitoria de la Ley estableció un ámbito de aplicación el cual comprende tres grupos de personas, siendo estos los siguientes¹:

- Nuevas generaciones, es decir aquellas personas que ingresaron ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a partir del día 22 de julio del año 2022;
- Personas pensionadas o con derecho adquirido a pensión, las cuales tal y como señala el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Social, comprende aquellos que ya tienen el carácter de jubilados o pensionados, o quienes a la entrada en vigor de la nueva ley, ya habían cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas en las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, ya abrogada.
- Personas en Transición, corresponde a aquellas personas que se hubieren afiliado al Instituto con fecha anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, pero que no hayan cumplido con los requisitos para acceder a una jubilación voluntaria o necesaria, a las cuales se les aplicará las excepciones descritas en los transitorios del séptimo al décimo cuarto, esto de conformidad a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio.

En cuanto a las personas pensionadas y aquellas que ya cumplían los requisitos para hacerlo a la entrada en vigor del Decreto, no puede hablarse de una violación al principio de progresividad, pues de la sola lectura del artículo Cuarto Transitorio se advierte que mantendrán su pensión en los mismos términos y condiciones en que la obtuvieron.

Respecto de las personas que a la entrada en vigor de la nueva ley no habían cumplido con los requisitos señalados en la ley ya abrogada para acceder a una jubilación voluntaria o necesaria, son las personas a quien la ley denomina en "transición" y por

¹Cuarto. Personas pensionadas o con derecho a pensión

Las personas servidoras públicas que estén disfrutando una pensión a la fecha de entrada en vigor de este decreto la mantendrán en los términos y condiciones en que la obtuvieron. Lo mismo aplicará para las personas servidoras públicas que hubieran cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas por las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento."

Sexto. Personas servidoras públicas en transición

Las personas servidoras públicas que se hayan afiliado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con fecha anterior a la entrada en vigor de este decreto y que no estén en el supuesto de su artículo cuarto transitorio, serán consideradas como personas servidoras públicas en transición, a las cuales les aplicarán las excepciones descritas en los siguientes artículos transitorios."

consiguiente únicamente tienen una expectativa de derecho y no un derecho adquirido a una pensión; por lo que no puede decirse que respecto de los mismos se estableció un régimen regresivo.

No debemos olvidar que conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos, por lo que, mientras éstos no se cumplan, la pensión constituye una expectativa de derecho, de lo que se sigue que el incremento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación y con ello un mayor número de años de cotización, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, no afecta derechos adquiridos.

En ese sentido, no puede hablarse de regresión en cuanto a derechos de las personas en transición que aún no poseen, en virtud de que su sólo ingreso o pertenencia al Gobierno del Estado de Yucatán no les garantiza que, llegado el momento, cumplirán con los requisitos para acceder a una pensión.

Es decir, la parte accionante pretende sustentar su acción sobre simples expectativas de derecho y reclamar prerrogativas de las que no son titulares los actores de la norma hasta prestar determinado número de años de servicio y cumplir con los parámetros de edad exigidos por el ordenamiento legal respectivo. En este escenario, condicionar las modificaciones legislativas en materia de seguridad social a la expectativa de recibir prestaciones que no son definitivas sino hasta alcanzar las exigencias de la norma, daría lugar a un sistema obsoleto que ni siquiera podría cumplir con las prestaciones de los derechohabientes que ya son acreedores de las pensiones en los términos de la legislación vigente, por tener derechos adquiridos.

Sirve de apoyo la siguiente tesis, por ser exactamente aplicable al caso:

ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). No puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de "San Salvador", adiciona a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regulaba la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983.

De lo anterior, es posible concluir que de ningún modo la Ley que pretenden tildar inconstitucional contiene disposiciones que puedan considerarse regresivas de derechos y por ende inconstitucionales, el grupo de personas en transición como se ha dicho poseen simples "expectativas de derecho", por lo que de ningún modo la modificación al esquema de cuotas y de pensiones, incluido el cálculo a través del salario regulador, transgrede el principio de progresividad reconocido en la Constitución.



Por lo que respecta al esquema de cuotas, los artículos 20, 21 y 22² en relación con el artículo octavo transitorio³ de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán establecen un esquema de aportaciones ordinarias a título de los servidores públicos, las entidades públicas y los pensionados distinto a la de la Ley abrogada. Si bien dicho esquema prevé un incremento en el porcentaje de aportación a cargo de los trabajadores al servicio del estado en funciones -ya sea en tránsito o de nuevo ingreso-, tal aumento no vulnera el principio de no regresión ni el principio de irretroactividad de la Ley.

Las cuotas y aportaciones de seguridad social tienen la naturaleza de contribuciones. Bajo esta perspectiva, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aumento de dichas cuotas no implica ni puede implicar una violación a la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contribuyentes, los trabajadores no adquieren el derecho a contribuir o aportar al sistema de seguridad social siempre sobre una misma base o cuota.

Máxime que es criterio de la Segunda Sala sostener que el principio de irretroactividad no se viola tratándose de contribuciones, porque esto significaría la congelación del derecho, a su inmovilización total o parcial y el consecuente cierre definitivo a los cambios sociales, políticos o económicos, lo cual sería contrario al Estado de derecho democrático y a la facultad que, en éste, tiene el legislador de ajustar la norma a las cambiantes necesidades de la sociedad y de la realidad.

Es decir, en el caso específico de las cuotas o aportaciones en materia de seguridad social, es facultad del legislativo, bajo un margen amplio de libertad de configuración, adaptar el sistema de acuerdo al contexto económico, del mismo modo que en materia de

² Artículo 20. Cuotas de las personas servidoras públicas

Toda persona servidora pública deberá cubrir al Instituto una cuota obligatoria equivalente al 15% de su salario de cotización. Dicha cuota se aplicará de la siguiente forma:

I. 13% para el fondo de pensiones.

II. 2% para el fondo de servicio médico.

Las personas servidoras públicas que perciban por jornada normal de trabajo únicamente el salario mínimo quedan relevadas del pago de las cuotas previstas en este artículo, las cuales serán cubiertas por la entidad pública en donde presten sus servicios.

Artículo 21. Aportaciones de las entidades públicas

Las entidades públicas entregarán al Instituto, como aportaciones, el equivalente al 21.75% del salario de cotización de cada persona servidora pública que labore en ellas y esté incorporada al régimen de esta ley. Dichas aportaciones se aplicarán en la siguiente forma:

I. 15.75% para el fondo de pensiones.

II. 6% para el fondo de servicio médico.

Artículo 22. Aportaciones de entidades públicas por personas pensionadas

Las entidades públicas entregarán al Instituto como aportaciones, el equivalente al 8% de la pensión que reciban las personas pensionadas sujetas a esta ley que hayan laborado en su dependencia o entidad. Dichas aportaciones se aplicarán en la siguiente forma:

I. 4% para el fondo de pensiones.

II. 4% para el fondo de servicio médico.

³ Octavo. Cuotas de las personas servidoras públicas en transición

Tratándose de las personas servidoras públicas en transición, las cuotas a que se refiere la fracción I del artículo 20 de esta ley, serán de un porcentaje de su salario de cotización establecido en el artículo séptimo transitorio de este decreto, de acuerdo con la siguiente tabla:

Año	Porcentaje
2022	6.00%
2023	7.00%
2024	8.00%
2025	9.00%
2026	10.00%
2027	11.00%
2028	12.00%
2029 en adelante	13.00%

Las cuotas a que se refiere la fracción II del artículo 20 de esta ley, serán del 2.00% del salario de cotización del servidor público en transición.

Las personas servidoras públicas en transición que perciban por jornada normal de trabajo únicamente el salario mínimo, quedan relevados del pago de las cuotas que se fijan en este artículo transitorio, las cuales serán cubiertas por la entidad pública en donde presten sus servicios.



contribuciones, sería imposible considerar que el contribuyente cuente con la esperanza de que una tasa, tarifa e incluso un régimen de tributación permanezcan inmodificables hacia el futuro.

Por identidad de razones es ilustrativa la siguiente tesis:

CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS. La figura de mérito, en relación con el tipo de actos referidos, debe invocarse bajo la perspectiva de irretroactividad de las normas consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pretender tutelar meras expectativas de derecho contra los actos legislativos equivaldría a la congelación del derecho, a su inmovilización total o parcial y el consecuente cierre definitivo a los cambios sociales, políticos o económicos, lo cual sería contrario al Estado de derecho democrático y a la facultad que, en éste, tiene el legislador de ajustar la norma a las cambiantes necesidades de la sociedad y de la realidad. Además, específicamente en el ámbito tributario, su diseño por vía de leyes es facultad del Congreso de la Unión y, por ende, conlleva un margen amplio de libertad de configuración, de modo que no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema tributario permanezca inmodificable y estático, sino por el contrario resulta indispensable para el poder público adaptar la normativa fiscal al contexto económico, tanto nacional e internacional, así como a las necesidades públicas. Aunado a ello, la modificación de las normas tributarias tiene, por regla general, un fin de interés público que es preponderante al interés particular de cada contribuyente, pues con base en el principio de generalidad tributaria se tutela el interés del Estado en la percepción de ingresos, que es un interés público encaminado a atender necesidades sociales relevantes con amplio respaldo o tutela constitucional, así como la necesidad de basar la contribución de los ciudadanos para sostener los gastos públicos en criterios de solidaridad. Por tanto, la confianza legítima no tiene el alcance de oponer al legislador meras expectativas de derecho para cuestionar la regularidad constitucional de los actos en los que se determina el establecimiento, modificación o supresión de regulaciones en materia de contribuciones, debido a la imposibilidad del contribuyente de contar con la esperanza de que una tasa, tarifa e incluso un régimen de tributación permanezcan inmodificables hacia el futuro.

Asimismo, por lo que respecta a las modificaciones al sistema de pensiones regulado en los artículos 3 fracción XXI, 107, 110, 111, 112 y 113⁴ de la Ley del Instituto de Seguridad

⁴ Artículo 3. Definiciones.

XXI. Salario regulador: equivale al ochenta y cinco por ciento del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional.

Artículo 107. Incremento de la cuantía de pensiones

La cuantía de las pensiones se incrementará anualmente, independientemente de su monto, en la misma proporción en que se incrementa el índice nacional del año calendario anterior.

La persona servidora pública que cuente con treinta y cinco años de cotización y sesenta y cinco años de edad tendrá derecho a una pensión por jubilación. El monto de esta pensión será equivalente al cien por ciento del salario regulador.

Artículo 111. Pensión por retiro anticipado

La persona servidora pública que haya cumplido sesenta años de edad y treinta y cinco años de cotización tendrá derecho a la pensión por retiro anticipado.

El monto de esta pensión se calculará multiplicando su salario regulador por el factor A descrito en la siguiente tabla:

Edad al momento del retiro anticipado	Factor A
65 o más	1.000
64	0.950
63	0.900
62	0.850
61	0.800
60	0.750

Artículo 112. Pensión por vejez

La persona servidora pública que haya cumplido veinte años de cotización y sesenta y cinco años de edad tendrá derecho a la pensión por vejez.

El monto de esta pensión se calculará multiplicando el salario regulador por el factor B en función de los años de cotización al momento de la solicitud de acuerdo con la siguiente tabla:

Años de cotización	Factor B	Años de cotización	Factor B
20	0.5000	28	0.7550
21	0.5300	29	0.7900
22	0.5600	30	0.8250



Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en vigor, que establecen un incremento en la edad y en los años de cotización para que una persona servidora pública pueda pensionarse o jubilarse, así como una nueva fórmula para el cálculo de la pensión según el tipo de pensión de que se trate, el concepto de salario regulador para calcular el monto de las pensiones, así como el incremento de estas a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tampoco puede considerarse que violan el principio de no regresión e irretroactividad, se insiste, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar .

Si bien en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta a los trabajadores que ya adquirieron el derecho a pensionarse ni mucho menos se desconocen los años de servicios prestados al Estado previa la expedición de la norma.

Máxime que en el supuesto sin conceder de que se estime que existe un derecho adquirido de la población trabajadora en transición, la Suprema Corte señala que no todas las medidas regresivas son inconstitucionales, cuando éstas se justifican plenamente se deben considerar admisibles bajo el parámetro de regularidad constitucional.

Sirve de apoyo la tesis siguiente:

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado

23	0.5900	31	0.8600
24	0.6200	32	0.8950
25	0.6500	33	0.9300
26	0.6800	34	0.9650
27	0.7200	35 o más	1.0000

Artículo 113. Pensión por retiro anticipado en edad avanzada

La persona servidora pública que haya cumplido veinte años de cotización y sesenta años de edad tendrá derecho a la pensión por retiro anticipado en edad avanzada.

El monto de esta pensión será el resultado de multiplicar el salario regulador por los factores A y B previstos en las tablas de los artículos 111 y 112 respectivamente en función de la edad y años de cotización al momento del retiro.



margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.

En el caso en concreto, la justificación de las medidas, debe analizarse a la luz del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el poder legislativo tiene un amplio margen de configuración legislativa cuando se trata de asegurar financieramente el sistema pensionario y conservar la seguridad social de los trabajadores del Estado. Lo anterior, se debe a que es esta autoridad, y no el Poder Judicial, quien se encuentra en una mejor posición para considerar qué medidas o ajustes legislativos son necesarios para garantizar un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social que haga viable un sistema como el de las pensiones.

En relación a la motivación reforzada es oportuno comentar que es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional o cuando se detecta una categoría sospechosa, cuestión que no se presenta en el caso que nos ocupa, tales modificaciones, en particular la integración y diseño del "salario regulador" que opera para las personas servidoras públicas en transición, no afecta ningún derecho fundamental adquirido por la población trabajadora ni se presenta una categoría "sospechosa", por lo que la motivación exigida al legislador es de tipo ordinaria y no estricta.

Es ilustrativa la siguiente tesis:

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental-



un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

No obstante esta baja exigencia de motivación legislativa, en la exposición de motivos del Decreto 532/2022 por el que se expidió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, el poder legislativo hizo hincapié en la necesidad de la figura del salario regulador, señalando lo siguiente:

SALARIO REGULADOR

*Actualmente, para determinar el monto a recibir por pensión, se considerará sueldo último el promedio mensual de todas las percepciones computables al servidor público, correspondientes a los 2 años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba. **Esta reforma que se plantea pretende evitar futuros abusos que podrían generarse en la última etapa de la vida laboral accediendo a salarios más elevados para llevarse una pensión más elevada sin haber cotizado en ese nivel.***

En esas condiciones, si el legislador consideró -tal y como lo hizo en la exposición de motivos del Decreto impugnado- que el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encontraba en una crisis financiera y que esto reduce su capacidad para hacer frente a sus obligaciones, en razón principalmente del sistema de pensiones que se ha visto afectado por el aumento en la esperanza de vida y la edad promedio de retiro, es claro que el esquema de cuotas y de pensiones, incluida la figura del salario regulador, se encuentra plenamente justificado, de no hacerlo, al Instituto le sería imposible cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho constitucional a la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado, considerar lo contrario implicaría que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya en el papel del legislador a quienes les corresponde analizar la necesidad de las modificaciones legislativas que permitirían hacer viable el sistema de pensiones en el Estado.

Es por lo anterior, que resultan infundados los conceptos de invalidez de la accionante, respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la Ley del ISSTEY, ya que como se manifestó en los párrafos precedentes, este se encuentra en total apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en consecuencia, no existe ninguna violación o afectación al derecho de los trabajadores en transición, así como tampoco existe transgresión al principio de progresividad reconocido en el texto constitucional.

SEGUNDO. DERECHO A UN MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA. Contrario a lo señalado por la accionante en su demanda, la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, no transgrede el derecho a un mínimo vital y la protección a la familia, por lo que resulta infundado su segundo conceptos de invalidez.



La accionante manifiesta que el artículo 125 de la Ley impugnada que prevé que las personas beneficiarias de un pensionado fallecido tendrán derecho a percibir dicha pensión pero el monto irá disminuyendo hasta llegar al 50% de la pensión que recibía el titular, evidencia -según su dicho- la regresión del reconocimiento del derecho de pensión por fallecimiento, ya que en un periodo de 6 años se pierde hasta el 50% del monto de la pensión que gozaba la persona fallecida, colocando en situación de vulnerabilidad a sus beneficiarios.

La normativa impugnada es la siguiente:

Artículo 125. Fallecimiento de las personas pensionadas

Las personas beneficiarias, en el orden establecido en el artículo 128, a la muerte de una persona pensionada, tendrán derecho a una pensión cuyo monto será igual a un porcentaje de la pensión que recibía el titular, actualizada conforme a lo dispuesto en esta ley, de acuerdo con la siguiente tabla:

Años disfrutados de pensión de los beneficiarios	Porcentaje de la pensión que recibía el titular (actualizada)
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6 en adelante	50%

El pago será retroactivo a partir del día siguiente al del deceso de la persona servidora pública o persona pensionada.

Sobre el derecho al mínimo vital, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1780/2006, lo reconoció como un derecho que se deriva de los principios de dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta.

A partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123, la Primera Sala consideró que un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, y a participar activamente en la vida democrática.

En ese sentido, contrario a lo señalado por la accionante, el esquema de disfrute de los beneficiarios sobre la pensión que recibía el titular de la misma, que prevé la reducción del monto total hasta llegar al 50%, no vulnera el goce del mínimo vital, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración legislativa para diseñar el esquema de pensiones, conforme a las necesidades financieras del Estado, y definir el monto que resulta más adecuado, como se manifestó en el apartado que antecede.

Se reitera, el derecho al mínimo vital no implica que el Estado deba garantizar el goce de una pensión conforme a un porcentaje o monto fijo, sino más bien significa que el Estado deba proveer y generar las condiciones para que las necesidades más elementales de los ciudadanos se vean satisfechas.



Sirve de apoyo la siguiente tesis del Pleno:

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN CUANTO A LOS MECANISMOS QUE PUEDE ELEGIR PARA SALVAGUARDARLO. Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos demanda que las manifestaciones de capacidad económica no idóneas para contribuir no las afecte el sistema fiscal -y, adicionalmente, que el impacto económico representado por los tributos no debe dejar de valorar las necesidades variadas que en cada caso influyen en la cobertura de las necesidades elementales, ajustándose ello a los diversos niveles de capacidad contributiva, cuando ésta ya permite la imposición de gravámenes-, también lo es que la consecución de tales objetivos no debe sujetarse a los efectos de una particular figura jurídica. En ese sentido, el principio de capacidad contributiva, a través del reconocimiento del derecho al mínimo vital, no demanda necesariamente la incorporación de una exención generalizada en el impuesto sobre la renta, o bien, una deducción también de carácter general, pues corresponde al legislador tributario diseñar el régimen legal del gravamen y, en lo que hace a este tema, definir si en un momento determinado resulta más adecuado a las finalidades del sistema fiscal, o más acorde con la realidad económica, un mecanismo u otra. Además, el fenómeno financiero es más complejo que el aspecto impositivo, por lo que el respeto al derecho al mínimo vital no debe implicar, única y exclusivamente, liberaciones de gravamen o la introducción de figuras que aminoren el impacto de los tributos, pues en la medida en que el Estado provea directamente satisfactores para las necesidades más elementales, puede quedar autorizado el establecimiento de contribuciones. En consecuencia, para cumplir con los requerimientos del derecho al mínimo vital como expresión del principio de proporcionalidad tributaria, el legislador cuenta con un margen de libre configuración, de ahí que pueden servir figuras tan dispares como las exenciones generales -o acotadas bajo algún criterio válido-, las deducciones generalizadas, las deducciones específicas por concepto o la valoración de condiciones sistémicas -como puede ser la existencia de tratamientos favorables en otras contribuciones, inclusive, las indirectas-, tomando en cuenta que también aportan elementos para el juicio que se efectúe en relación con el grado de cumplimiento con dicho derecho, la forma en la que el Estado social distribuya sus recursos, verificando la medida en la que las asignaciones directas o subsidios pueden tener un impacto en los más necesitados, valorando cómo inciden unas y otros en la tributación de estos grupos.

En consecuencia, si conforme a la exposición de motivos del Decreto, el legislador consideró que la reducción del porcentaje de la pensión que los beneficiarios recibirán al fallecimiento del pensionado titular irá disminuyendo hasta llegar al 50%, era necesario para garantizar financieramente la subsistencia del sistema de pensiones del Estado de Yucatán y que este pueda estar en aptitud de asegurar el derecho a la seguridad social de los trabajadores del gobierno, llegamos a la eminente conclusión de que existe justificación constitucionalmente válida para la adopción de dicha medida.

Esto sin perder de vista, como se ha relatado ya, que por lo que trata al diseño del esquema de pensiones, el legislador no se encuentra obligado a exponer una motivación reforzada, en un sistema democrático como el nuestro, se reconoce que es el legislador quien se encuentra en mejor posición para determinar cuáles son las formas y figuras legales necesarias para garantizar un sistema de pensiones que permita disfrutar a los trabajadores presentes y futuros de una pensión.

Máxime que además de tratarse de una medida constitucionalmente válida, necesaria para garantizar la estabilidad financiera del Instituto e idónea para tal fin, se trata de una decisión legislativa que no afecta de ninguna forma los derechos de subsistencia los beneficiarios del pensionado fallecido, resultando a todas luces lógico y evidente que tras el fallecimiento del trabajador, decrecen los integrantes de la familia, por lo cual es



susceptible que los gastos y el consumo de su familia que se beneficiaba de su pensión también se reducen tras su fallecimiento.

Es decir, si una familia disfrutaba el 100% del monto de la persona pensionada trabajadora cuando esta se encontraba con vida, es evidente que tras su fallecimiento, disminuye el número de integrantes de la familia, lo cual es susceptible que repercuta en los gastos de dicha familia, y por lo tanto, resulta proporcional que el monto de la pensión del trabajador fallecidos que los beneficiarios disfrutarán, se vea también reducido.

Por todo lo anterior es que resulta infundado el segundo concepto de invalidez planteado por la accionante en su demanda, ya que el artículo 125 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, es constitucionalmente válido en los términos aquí expuestos.

TERCERO. OBLIGACIÓN DE ANÁLISIS DE CONTEXTO SOCIAL. Es infundado el tercero y último de los conceptos de invalidez planteado por la accionante en el cual sostiene que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y el Congreso del Estado, no realizaron un análisis minucioso y objetivo de las circunstancias y contexto social al emitir el Decreto.

No le asiste razón a la accionante ya que de la sola lectura de la exposición de motivos del decreto número 532/2022 por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se puede advertir que el legislador plasmó claramente que su objetivo central, fue garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras con el conocimiento de que este objetivo sólo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa que se detalla en la iniciativa presentada de origen, así como la modificación de otros parámetros que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario.

El legislador tomó en consideración el caso particular el sistema pensionario en el Estado de Yucatán que se encuentra transitando en un punto crítico, dado que el incremento poblacional es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, ya que se estima que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significaría un desbalance en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Ante tal escenario y contexto concreto del Estado, el Congreso estimó era necesario modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, ya que el mismo queda rebasado y actualmente resulta inviable debido al incremento en la esperanza de vida y el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, factores que representan un cambio desproporcionado en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema pensionario anterior.

Contrario a lo sostenido por la accionante, el Congreso analizó a profundidad y con seriedad el contexto del esquema de seguridad social del Estado, concluyendo que de continuar el sistema como se encontraba, únicamente generaría un colapso financiero y una ruinoso descapitalización, toda vez que el importe de los egresos por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones, seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente insostenibles, poniendo en riesgo la seguridad económica de los



pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones.

En dichas condiciones, resulta infundado el concepto de invalidez planteado por la accionante, pues el legislador en efecto sí analizó el contexto social del Estado, de la esperanza de vida de los trabajadores y pensionados, y llegó a la conclusión de la necesidad de adaptar el sistema de pensiones a los tiempos para poder permitir una mayor estabilidad y rentabilidad presupuestal del Instituto y con ello garantizar el derecho de las y los trabajadores a percibir una pensión.

Se insiste, la modificación no sólo es una necesidad justificada en razón del estado financiero del Instituto, sino que de ninguna manera vulnera el principio de progresividad que debe imperar en el derecho a la seguridad social, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regulaba la anterior Ley, ni mucho menos afecta los derechos de la población ya pensionada o los derechos adquiridos para hacerlo, sino en todo caso, se trata de un ajuste que permite que sea sostenible en el tiempo el derecho a acceder a una pensión para los trabajadores actuales y en transición al servicio del Estado.

Sirve de apoyo nuevamente la siguiente tesis:

ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). No puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de "San Salvador", adiciona a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regulaba la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983.

No se vulnera este principio, pues al tratarse el objetivo de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán de garantizar o sostener la viabilidad del Instituto y, a su vez, de las pensiones y jubilaciones y demás derechos de los trabajadores tanto en activo como ya jubilados al Servicio del Estado de Yucatán, esta aplicación en este sentido del principio se encuentra justificada, como ya se ha abordado, ésta implica un beneficio en pro de la colectividad, principalmente el de todos los trabajadores al servicio del estado de Yucatán tanto en activo como los ya jubilados.

Por todo lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, solicito que ese Alto Tribunal supla cualquier deficiencia en este informe.

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada ante Notario Público del Estado de Yucatán, del nombramiento hecho a mi favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Licenciado en Derecho Mauricio Vila Dosal, y la Secretaría de Administración y Finanzas, por suplencia y en ejercicio de las funciones que le correspondan a la Abogada María Dolores Fritz Sierra de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veintiuno.



2.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada del Suplemento del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintidós, en el cual salió publicado el Decreto número 532/2022, mediante el cual se emite la Ley de Seguridad Social del Estado de Yucatán.

3.- INSTRUMENTAL PÚBLICA, que hago consistir en todas y cada una de las actuaciones de este procedimiento en lo que me benefician.

4.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS, en todo lo que me favorezcan.

Por lo expuesto y fundado;

A ESA HONORABLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA:

1.- Tenerme por presentado, con el presente memorial y documentos que acompaño, contestando, en tiempo y forma, la presente Acción de Inconstitucionalidad.

2.- Tener por ofrecidas las pruebas que se relacionan y admitirlas conforme a Derecho.

3.- En atención a todo lo considerado, al haberse desestimado los conceptos de invalidez invocados por la parte accionante, solicito que mediante sentencia se declare la constitucionalidad y validez del Decreto número 532/2022 de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintidós, mediante el cual se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán.

4.- Asimismo y en estricto acatamiento a la circular 12/2009 de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicito faculte a los delegados nombrados en este asunto el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales que emanen del presente asunto, previa autorización que al momento de su uso otorgue el Secretario adscrito a dicho Juzgado Federal y constancia que de ello se deje en autos, con excepción de los documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.

Protesto lo necesario, en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

LIENCIADO EN DERECHO YUSSIF DIONEL HEREDIA FRITZ,
CONSEJERO JURÍDICO, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.

017925

SE
JURISDICCION DE LA NACIÓN

2022 OCT 22 10 57

CRIC

Recibido de correo en (14) paginas con (33) folios segun sus certificaciones
- Dos anexos certificados en (1) y (33)
- Cinco trasladados y el sobre que se agrega.